AUTO N° 27

San Francisco, 26 de junio de 2023.

EL PROCESO

- 1) Caratulado “**J., S. A. - S., M. N. - CAUSA PEN/JUV. CON NNA PUNIBLE Y NO PUNIBLE**” (expediente mixto SAC N° xxxxxxxx).
- 2) Tramitado en este Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y Género y Penal Juvenil de la 5ta. circunscripción judicial de Córdoba, a cargo del **Juez Andrés E. Peretti**, Secretaría Penal Juvenil.
- 3) Seguido en relación a **S. A. J.**, DNI N° XXXXXXXXX, argentino, soltero, de 19 años de edad, nacido en esta Ciudad el 05/01/2004, hijo de J. F. J. e I. N. Q. (ambos vivos), estudiante de 7° año del secundario (en _____), trabaja en mantenimiento de jardines y venta de bolsones de fruta y verdura, practica fútbol en la reserva del club _____, no consume drogas, no padece enfermedades de relevancia, consume alcohol esporádicamente, domiciliado en calle _____ de esta Ciudad, prontuario policial N° 51.496 I. G..
- 4) El día 1° de junio de 2023 celebré audiencia para debatir la necesidad de imponer pena a S. A. J., la cual se llevó a cabo a puertas cerradas (art. 104, inc. “a” de la Ley Provincial N° 9.944).

El acto lo celebré asistido por la Prosecretaria **María Josefina Armando** y tomaron parte:

- * El Fiscal Penal Juvenil, **Bernardo Miguel Alberione**;
- * **S. A. J.**, asistido por su defensor, **César Basilio Testa**, y acompañado de sus progenitores, **J. F. J. e I. N. Q.**;

* El Asesor de Niñez y Juventud, en representación complementaria de la víctima menor de edad, **Lucio Agustín Sarnago**, y;

* La víctima **I. Q.**, acompañada de su madre, **R. T.**

5) Esta es la oportunidad prevista para la lectura integral de los fundamentos de la resolución dictada inmediatamente de cerrado el debate mencionado (art. 409 del CPP).

ACTOS PROCESALES CUMPLIDOS

1) Declaración de responsabilidad y tratamiento tutelar

Mediante **Sentencia N° 33 del 08/06/2022** (en SAC, fecha indicada) resolví:

a) Declarar a S. A. J. autor penal y materialmente responsable de los delitos de Abuso sexual con acceso carnal continuado (art. 119, tercer párrafo del Código Penal) y Abuso sexual simple continuado (art. 119, primer párrafo del Código Penal), ambos en concurso real (art. 55 del Código Penal) y en perjuicio de I. Q., de conformidad a la Requisitoria Fiscal de Citación a Juicio de hojas 237-254 de este expediente;

b) Someter a S. A. J. a un período de prueba sociocomportamental por el término de 1 (un) año a partir del día 17/05/2022 en condición de libertad (arts. 4, inc. 3 de la Ley N° 22.278, 37 y 40, ssgtes. y ccdtes. de la Convención sobre los Derechos del Niño y 3, 9 y 19 de la Ley N° 26.061, 105, ssgtes. y ccdtes. de la Ley Provincial N° 9.944);

c) Diferir hasta el vencimiento del régimen de prueba la resolución sobre la necesidad de imponer pena y costas a S. A. J., salvo grave quebrantamiento de las condiciones fijadas, y;

d) Vencido el término de prueba y acreditado el cumplimiento de las pautas de conducta impuestas, absolver de pena a S. A. J.

Caso contrario, imponer la pena de cuatro (4) años de prisión para su tratamiento penitenciario, adicionales de ley y costas (arts. 5, 9, 29 inc. 3, 50, 40 y 41 C.P., 550 y 551 CPP).

2) Pautas de conducta impuestas

Durante el período de prueba (art. 4 de la Ley N° 22.278) impuesto a S. A. J. en la sentencia referida, el joven debió cumplir con las siguientes pautas de conducta:

- No cometer nuevos delitos ni contravenciones;
- No consumir drogas ni emborracharse;
- Continuar la escuela secundaria hasta su finalización.

Acreditar al finalizar el período de prueba el cumplimiento a lo largo de todo el año de esta condición;

- Realizar actividad laboral en la medida de sus posibilidades. Acreditar al finalizar el período de prueba el cumplimiento de esta condición;
- Practicar un deporte de su preferencia.

Acreditar al finalizar el período de prueba el cumplimiento a lo largo de todo el año de esta condición;

- Realizar tratamiento psicológico con orientación psicosexual con el profesional de su preferencia.

Debe acreditar el cumplimiento de esta condición con carácter mensual a lo largo de todo este año de prueba.

Además, al finalizar el período de prueba, debe acompañar un amplio informe de evolución y diagnóstico;

- Mantener el domicilio. En caso de mudarlo, dar inmediato aviso al Tribunal. Venir al Juzgado cada vez que sea citado.

- No acercarse al domicilio de la víctima I. Q. y a los lugares en que circunstancialmente se encuentren (estudio, esparcimiento, etc.). Si se la encuentra de manera casual en algún lugar, debe retirarse inmediatamente sin decir palabra alguna, mirarla o hacerle ningún gesto, y;
- No comunicarse de ninguna manera ni por ningún medio (incluidas redes sociales) con la víctima I. Q., ni de manera personal ni a través de otras personas.

3) **Prueba reunida durante el tratamiento tutelar**

A lo largo del período de prueba sociocomportamental impuesto a S.A. J. reuní los siguientes elementos de convicción, legalmente incorporados al debate (SAC, 01/06/2023):

* **Documental/instrumental/informativa:** actas de actualización de conocimiento directo y personal (SAC, 09/09/2022, 23/12/2022, 28/03/2023, 08/05/2023), certificados de escolaridad (SAC, 09/09/2022, 23/12/2022, 28/03/2023), constancias deportivas (SAC, 16/09/2022, 23/12/2022, 28/03/2023), constancias de atención psicológica e informes psicológicos (SAC, 28/09/2022, 31/10/2022, 23/12/2022, 28/03/2023), constancia de actividad en fundación El Puerto (SAC, 29/11/2022), informes de la División Antecedentes Personales y el Registro Nacional de Reincidencias y certificación actuarial respectiva (SAC, 20/04/2023), informe remitido por el Lic. Martín Ezequiel Biotti (SAC, 29/05/2023);

* **Declaración testimonial:** Lorena Andrea Jobson (SAC, 21/03/2023), y;

* **Demás constancias** de este expediente.

4) **Alegato de las partes**

Durante la audiencia de debate sobre la necesidad de imponer pena a S. A. J. (SAC, 01/06/2023), las partes opinaron:

* **Fiscal Penal Juvenil:** *“...es importante tener en cuenta el objetivo de estas audiencias y del proceso penal juvenil, esto es, dar una oportunidad a la persona de que reconozca, se recupere y entienda la criminalidad de su acto no obstante no haber tenido la maduración suficiente en ese momento. Si yo tomo el informe último del psicólogo tendría que pedir pena. Pero en todas las demás cuestiones ha cumplido: colegio, futbol, trabajo. Pero la principal en esta clase de delitos es la comprensión de que el acto por el que fue declarado responsable afectó a una persona. Si no logramos esto, no logramos nada. El entendimiento de la magnitud del hecho es fundamental. Aquí hay reticencia. Pero tampoco entiendo que lo mejor para el joven sea su detención. Es fundamental que entienda cómo afectó a esa persona. Dicho esto, entiendo que, tomando especial acento en el tratamiento psicológico como esencial, debe prorrogarse el tratamiento por el término de seis meses, requiriendo que redoble sus esfuerzos en la asistencia psicológica. Existen elementos suficientes que probaron la existencia del hecho. Por eso es necesario que el joven pueda comprender lo que hizo. Debe entender que lo que hizo está mal. Por eso, solicito la prórroga del tratamiento con la condición sine quantum de la adherencia al tratamiento psicológico para su eventual absolución de pena...”;*

* **Asesor de Niñez y Juventud:** *“...en mi carácter de representante complementario de la adolescente I. Q. (103 CCCN), coincidido con el señor Fiscal. Entiendo la gravedad del hecho por el que fue declarado responsable J. En los delitos de abuso sexual no hay forma de reparar el daño, pero es importante hacer hincapié en que le joven infractor entienda la gravedad del hecho cometido y a partir de allí trabajar en el control de impulsos para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Como se trata de una persona joven, inserta en la sociedad, la pena sería para él un*

perjuicio. Pero en este caso es necesario prorrogar el tratamiento para que profundice psicológicamente en estas cuestiones y se cumplimenten los fines del proceso penal. Por eso me adhiero a los argumentos del señor Fiscal y solicito prórroga...”;

** Defensor: “...la presente audiencia es para determinar si resulta necesario imponer pena por los hechos de los que fuera declarado responsable. En este sentido, esta defensa entiende que J. debe ser absuelto de pena, porque hay cumplimentado satisfactoriamente el tratamiento impuesto. Corresponde analizar el modo en que el tratamiento se ha efectuado y se arrojó resultado suficiente para la absolución de pena. De las constancias de la causa surge que J. cumplió con las condiciones impuestas de manera acabada. Continuó sus estudios secundarios, realizó práctica de fútbol, trabaja en el mantenimiento de lotes y venta de verduras, ha realizado tratamiento psicológico como se ordenó. Todo esto fue acreditado mensualmente, tal como surge de las diversas audiencias de contacto personal. No cometió delitos ni contravenciones según informa reincidencias y la policía departamental. No ha consumido drogas ni emborrachado. Y finalmente no ha mantenido contacto de ningún tipo con la víctima, tal como informa la comisionada Lorena Jobson, de conformidad a entrevista con la progenitora de la víctima. Puede advertirse cumplimiento satisfactorio y fructífero del tratamiento impuesto y alcanzado los objetivos del proceso penal juvenil. Tal como señala nuestro Tribunal Superior, no puede exigirse un cumplimiento perfecto del tratamiento tutelar. Sólo puede exigirse un tratamiento suficiente, ya que el tratamiento perfecto ni siquiera se exige para los adultos. Basta que cuente con las herramientas necesarias para desenvolverse de manera productiva en la sociedad. Por eso, llevado al caso concreto, considero que el tratamiento realizado por J. determina que no sea necesaria su imposición de pena. Por eso solicito la absolución de pena...”.*

5) Palabra de los progenitores de S. A. J.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 104 de la Ley Provincial N° 9.944, durante el debate escuché a los progenitores de S. A. J., que expresaron: “...sobre todo los fines de semana sale a vender los bolsones de verdura con el primo y me ayuda a mí a hacer los lotes, pero cuando tiene tiempo porque la escuela rural le demanda mucho tiempo y le queda poco tiempo para poder hacer algo de trabajo...” (SAC, 01/06/2023).

6) Opinión de la víctima

Atento los derechos que le asisten a I. Q. en los términos de la ley 27.372, durante el debate (SAC, 1/6/2023) di la palabra a la víctima y a su progenitora para que expresen aquello que considerasen oportuno, facultad que fue voluntariamente omitida por éstas.

7) Última palabra de S. A. J.

Previo al cierre del debate, S. A. J. declaró: “...todo esto me llevó a ver que hice mal las cosas. Pido perdón porque en su momento no sabía lo que estaba haciendo y ahora sí y por eso quiero pedir perdón y sé que estuve muy mal con I...”.

FUNDAMENTOS DE ESTA RESOLUCIÓN

1) Como cuestión preliminar, teniendo en cuenta las partes involucradas y las cuestiones planteadas en este expediente, tengo presente que la igualdad de trato –en determinadas circunstancias– oculta la situación de especial vulnerabilidad en la que se encuentran determinados grupos por hallarse sometidos, de diversas formas, a la violencia y discriminación.

En las categorías “sospechosas”, tales como el género, la identidad racial, la pertenencia religiosa o el origen social o nacional –entre otras–, los Tribunales deben aplicar un

examen más riguroso, que parte de una presunción de invalidez (cfr. Fallos 327:5118; 329:2986; 331:1715).

2) Cuando la víctima es mujer y sufre violencia en razón de su género, se encuentra protegida por el Estado por pertenecer al colectivo de personas que cuentan con esta protección especial (cfr. “Convención sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer” o “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*” o “CEDAW”, aprobada por Ley N° 23.179, la “Convención de Belem Do Pará” o “Convención interamericana para prevenir sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, aprobada por Ley N° 24.632, así como también nacionales a Ley N° 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y Leyes Provinciales N° 9.283 y N° 10.401).

3) De las constancias de este expediente y del contacto directo y personal con la víctima, tengo presente que I. Q. es una persona en **condición de vulnerabilidad extrema**, teniendo en cuenta su edad, su género y su limitación para evitar o mitigar los daños y perjuicios derivados de la infracción penal o de su contacto con el sistema de justicia o para afrontar los riesgos de sufrir una nueva victimización (Reglas N° 5, 17-20 y 10-12 respectivamente de las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad –conocidas como las “100 Reglas de Brasilia”–, que fueron aprobadas por la “XIV Cumbre Judicial Iberoamericana” –4 a 6 de marzo de 2008–).

4) En consecuencia, tomando en cuenta el **análisis interseccional** que impone el presente caso (*i.e.*, revelar las variadas identidades, exponer los diferentes tipos de discriminación y desventaja que se dan como consecuencia de la combinación de

identidades), debo adoptar las medidas que resulten adecuadas para mitigar la victimización primaria (efectos negativos del delito) y secundaria (daño sufrido por la víctima del delito no se vea incrementado como consecuencia de su contacto con el sistema de justicia).

5) Así, la misión de juzgar con perspectiva de género implica no sólo interpretar las normas y aplicar el derecho tomando en cuenta los principios ideológicos que la sustentan, así como la forma en que afectan, de manera diferenciada, a quienes acuden a demandar justicia, sino también **apreciar los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia.**

Al respecto, el Comité CEDAW destacó que el “...establecimiento de estereotipos afecta... la credibilidad de las declaraciones, los argumentos y los testimonios de las mujeres, como partes y como testigos. Esos estereotipos pueden hacer que los jueces [y juezas] interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa...” (Recomendación General N° 33, 03/08/2015, párr. 26).

6) Por otro lado, al momento de valorar el período de prueba impuesto a S. A. J. en la Sentencia N° 33 del 08/06/2022, tengo presente que el comportamiento exigido a los jóvenes en conflicto con la ley penal no debe ser “ejemplar”, sino que se requiere “...la observancia regular se verifica por la ausencia de infracciones graves o repetidas (TSJ, Sala Penal, S. 43, 27/12/91, ‘Iturre o Iturrez’; S. 30, 16/10/92, -‘Caridi’; S. 44, 29/12/92, ‘Messina’; S. 77, 18/9/98, ‘Chávez’; S. 2, 19/2/99; S. n° 2, 19/2/99 ‘Murúa’, entre otros), es decir, no se requiere un periodo de prueba con resultado perfecto...” (TSJ, Sala Penal, “M. M., I. N.”, S. n° 38 del 29/02/2016).

En otras palabras, el resultado exigido a los adolescentes punibles que fueron declarados responsables debe ser “intermedio” o “suficiente” para neutralizar la pretensión punitiva.

7) Luego de oír a las partes y analizar la prueba reunida, entiendo que el pedido de prórroga solicitado por el Fiscal Penal Juvenil –con adhesión del Asesor de Niñez y Juventud de la víctima– resulta la solución más ajustada a derecho.

Doy razones:

a) Del expediente y la audiencia celebrada advierto que S. A. J. cumplió con las pautas de conducta impuestas por este Juzgado, tal como surge de las constancias de escuela, deporte, trabajo y atención psicológica acompañadas en las audiencias de conocimiento directo y personal referenciadas más arriba.

Desde el inicio de este proceso judicial, S. A. J. pudo demostrar que estaba inserto de manera productiva en su ámbito familiar y social:

- El joven iba a la escuela técnica con orientación agropecuaria, y actualmente, se encuentra cursando el último año;
- No consumía drogas ni alcohol, ni lo hace en la actualidad;
- Asistía y participaba activamente de la Fundación _____, y lo sigue haciendo hasta hoy;
- Practicaba deporte y lo mantuvo hasta la fecha de la audiencia;
- Actualmente trabaja;
- Vivía con sus progenitores y hermanos en un ámbito familiar valorado positivamente por el equipo técnico de estos Tribunales, y continúa residiendo junto a ellos.

b) Sin embargo, **S. A. J. no logró una cabal comprensión del daño que provocó con su accionar a la víctima I. Q.**, hechos por los cuáles fue declarado responsable en la Sentencia N° 33 del 08/06/2022.

c) Si bien S. A. J. realizó el tratamiento psicológico ordenado por este Tribunal, no logró adherencia al mismo ni abordó en profundidad los aspectos psicosexuales que se ordenaron.

En cuanto aquí importa, el Lic. Martín Biotti informó: “...*La periodicidad de las sesiones está estipulada de forma semana... Si bien el Sr. J., S. A. manifestó verbalmente referencias positivas respecto al tratamiento, paralelamente se percibe que el proceso de psicoterapia individual no ocupa un lugar de elevada relevancia, sino que se reduce a una obligación a cumplir. Esto encuentra asidero, no sólo en lo expresado verbalmente en otras oportunidades, sino en las resistencias demostradas para asistir a las sesiones, por lo cual podría afirmarse que no hay, al momento, una adherencia al tratamiento suficiente para generar cambios subjetivos. Si bien el tratamiento ordenado por el Tribunal es con orientación psicosexual, lo cual no ha sido abordado exhaustivamente aún, sí han sido tratados aspectos de importancia para el entrevistado, como son pérdidas significativas en su historia vital o aspectos vinculares con su entorno actual...*” (SAC, 29/05/2023; los destacados me pertenecen).

d) Conforme puede apreciarse, las pautas de conducta impuestas por este Juzgado a S. A. J. no implicaron un esfuerzo mayúsculo, toda vez que al momento de la comisión de los delitos por los cuáles fue declarado responsable, contaba con sostén familiar y afectivo, así como también, con hábitos y actividades saludables.

e) De allí la importancia de iniciar un proceso reflexivo sobre los hechos cometidos y el perjuicio ocasionado, de la mano de un tratamiento psicológico con orientación psicosexual.

S. A. J. cumplió con el tratamiento psicológico por obligación, sin adherencia al mismo y sin abordar aquello que se le ordenó como cuestión central: los aspectos psicosexuales.

8) Por lo expuesto, convencido que la apreciación de las pautas de conducta impuestas excede lo numérico, matemático o cuantitativo, sino que exige un **análisis cualitativo acorde al objetivo del régimen penal juvenil convencionalizado**, es decir, la construcción de ciudadanía en torno la incorporación del joven de manera constructiva a la sociedad, y respetuosa de las normas de convivencia y los derechos de los terceros (art. 40, primera parte, de la CDN), **considero que el período de prueba impuesto no es “suficiente” o “satisfactorio”**.

9) Teniendo en cuenta que cada caso es singular y que la imposición del período de prueba debe atender a las particularidades de los adolescentes declarados responsables en miras de lograr su reinserción social y evitar la reiterancia y reincidencia delictiva, la valoración de las pautas de conducta necesariamente debe realizarse bajo esa óptica peculiar, evitando generalizaciones.

10) En el caso concreto, atento que los ofensores sexuales como S. A. J. construyen distorsiones en su conocimiento del mundo, formando sistemas de creencias a partir de los cuales interpreta la realidad y disparan distintos sentimientos y pensamientos que conforman sus patrones de conducta (cfr. Servicio Penitenciario Federal, “Programa de Tratamiento para Ofensores Sexuales”, Boletín Público Normativo N° 576, *link*: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/1_-

[programa de tratamiento para ofensores sexuales.pdf](#)), adquiere importancia cardinal el abordaje específico de las cuestiones psicosexuales.

Especialistas sostienen que la incapacidad de experimentar empatía es una característica común de los ofensores sexuales, en tanto les resulta imposible sentir el dolor de sus víctimas, al punto que suelen mentirse a sí mismos para estimular y justificar sus delitos (cfr. Daniel GOLEMAN, *La Inteligencia Emocional*, Ed. Vergara, Buenos Aires, 2004, págs. 134-135).

11) En dicho entendimiento, tengo presente que si bien S. A. J. reconoció su participación lisa y llana en los hechos por los que declarado responsable (SAC, 17/05/2022), así como también, pidió perdón a la víctima I. Q. al momento del debate sobre la necesidad de imposición de pena (SAC, 01/06/2023), no resulta suficiente aún para alcanzar la convicción sobre la real comprensión del daño causado, y con ello, habilitar la desestimación de una pena por los hechos cometidos.

El informe del psicólogo tratante (SAC, 29/05/2023) permite concluir que S. A. J. no logró reflexionar sobre el daño causado a I. Q. y, con ello, efectivamente reinsertarse en la sociedad evitando repetición en el futuro de las conductas que lo trajeron a este proceso.

Desde ya, esta circunstancia no puede ser analizada a partir de las constancias de mera asistencia de S. A. J. a tratamiento psicológico, sino que es necesario contar con un informe completo de diagnóstico y evolución en este sentido, elaborado por el profesional que lo asiste y sostenido en el tiempo, tal como sucedió con el informe del Lic. Martín Biotti (SAC, 29/05/2023).

12) Al respecto, la jurisprudencia entendió que “...no se ha observado hasta aquí que el encausado haya desenvuelto un juicio reflexivo, autocrítico, con respecto al muy

*grave episodio que lo trajo a proceso. Nada lo obligaba a confesar su intervención en el mismo, pero sí era muy importante que el pronunciamiento judicial firme suscitara en él una reconsideración de su trayectoria vital, y de las circunstancias que lo involucraron en el mismo, lo que nunca hizo explícito ante el suscripto... la justicia juvenil, en el camino que ha emprendido hacia lo restaurativo, exige que haya reprobación a la vez que reintegración. Mucho acento han puesto las parte en lo último, pero se ha obviado que la dimensión de un hecho que hiere la convivencia únicamente se supera con muestras inequívocas de reencuentro con las bases que la hacen posible, con muestras inequívocas que devuelven al encausado la confianza de los demás, lo que **no se satisface con logros personales que hacen a la propia vida sino con hechos que ponen a la vista que el sujeto ha formado conciencia, no sólo del sentido del a propia vida, de su dignidad y valor, sino del respeto que debe a los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros...*** (Juzgado Penal Juvenil de 4º Nom., Sec. N° 3, S. N° 15, 03/10/2017 en causa SAC N° xxxxxxxxx; el resaltado me pertenece).

13) Por último, en mi misión de juzgar con perspectiva de género, no puedo obviar que las sentencias que involucran derechos fundamentales tienen **poder simbólico**, toda vez que *“...tienen implicaciones que trascienden a los directamente involucrados, porque a través de esa decisión judicial se está construyendo una cierta visión del pasado y con ella se abren algunas posibilidades para el futuro y se excluyen otras...”* (Alicia E. C. RUIZ, “Teoría crítica del Derecho y cuestiones de género”, Colección Equidad de Género y Democracia, Vol. 6, Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Electoral del Distrito Federal, 2013, p. 19).

Sobre los efectos, nuestro Máximo Tribunal Provincial sostiene que “...*la proyección de tales soluciones importa un mensaje a los ciudadanos sobre el camino emprendido en contra de esta clase de discriminación, adquiriendo el Poder Judicial un rol activo en la prevención y reparación que tales afectaciones acarrearán. Un paso adelante en este camino será lograr prevenir comportamientos que atenten contra la igualdad de género a partir de la aplicación de reglas claras sustentadas en la idea de una sociedad libre y democrática de modo tal que todos sus integrantes logren proyectar su plan de vida y ejecutarlo...*” (TSJ, Sala Penal, “L., G. M.”, S. N° 56, 09/03/2017).

14) En el caso en análisis, la prórroga del tratamiento con especial énfasis en el tratamiento psicosexual no sólo importará una nueva oportunidad para que S. A. J. demuestre que comprendió las consecuencias de los delitos cometidos, sino que además, teniendo en cuenta las resoluciones judiciales van más allá de las personas que son afectadas o beneficiadas directamente por la decisión de un Juez, generará confianza en el sistema judicial, previsibilidad y seguridad jurídica, al tiempo que aborda sustantivamente el manejo de expectativas.

15) Si bien es cierto, tal como resalté más arriba, que S. A. J. reconoció haber abusado sexualmente a I. Q. y pidió perdón, creo necesario extender el período de prueba en el entendimiento que la terapia psicosexual no sólo le permitirá trabajar sobre los mecanismos de defensa (*i.e.*, “yo no lo hice” y otras negaciones, coartadas, culpabilizar a otros, etc.; “no fue tan malo” y demás minimizaciones, justificaciones, desvalorización de la persona, etc.; “sí, pero...” y otras formas de poner excusas, buscar consenso en los demás, manipulación de la intencionalidad, etc., o la utilización del exceso de alcohol o drogas como mecanismo de justificación y falta de responsabilidad en las conductas sexuales desviadas), sino que además, fortalecer la empatía y estimular

la capacidad de resiliencia con el objetivo de disminuir los riesgos de reiterancia delictiva y dar continuidad a su desarrollo personal socialmente productivo

16) En síntesis, la prórroga del tratamiento permitirá a S. A. J. trabajar sobre su sistema de creencias, sus emociones y sus valores para modificar pensamientos distorsionados, y conductas antisociales, al tiempo que representará una herramienta para estimular la autoestima, promover el autocontrol de los impulsos con el fin de morigerar y modificar el ciclo abusivo y desarrollar habilidades sociales del sujeto.

17) Finalmente, también corresponde diferir el pronunciamiento sobre la necesidad de imponerle pena por los delitos cometidos y costas hasta la finalización de esta prórroga, salvo grave quebrantamiento de las condiciones tutelares a imponer.

LENGUAJE CLARO

Con el fin de asegurar que las personas involucradas en este proceso comprendan mejor lo que decidí, destinaré al final de la presente resolución algunos párrafos de lectura fácil especialmente destinados a S. A. J., I. Q. y sus progenitores.

Allí utilizaré lenguaje sencillo con términos claros y comprensibles a fin de adaptar esta resolución y explicar todo aquello que valoré para arribar a la decisión final.

Con esto, quiero aportar a la construcción de una justicia más abierta y accesible a sus destinatarios, de conformidad a las Reglas N° 58, 60, 61, 72 y 78 de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad o “100 Reglas de Brasilia” (aprobadas en la “XIV Cumbre Judicial Iberoamericana” celebrada del 4 al 6 de marzo de 2008); y así garantizar el derecho de información y comprensión de los justiciables (arts. 18 y 42 CN).

Sólo así se logrará una justicia más abierta, más accesible a los usuarios del sistema judicial y a los ciudadanos en general (cfr. Claudia A. POBLETE - Pablo FUENZALIDA GONZÁLEZ, “Una mirada al uso de lenguaje claro en el ámbito judicial latinoamericano”, Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 69 -junio 2018-, págs. 119-138).

En ese sentido, “...*la empatía con el lector constituye una garantía de eficacia de los actos de comunicación; puesto que el sentido de los textos no depende únicamente del trabajo de producción discursiva, sino también de la interpretación que desarrolla el destinatario en el caso concreto...*” (Leonardo ALTAMIRANO, *Lenguaje claro y discurso jurídico*, Ed. Toledo, Córdoba, 2023, p. 43).

Y además, “...*El derecho no sólo es una ciencia, sino también un instrumento de resolución de conflictos y –como tal- está dirigido potencialmente a toda la comunidad. Entender una ley o una sentencia es condición necesaria para cumplirla...*” (Horacio ROSATTI, “La palabra de la Corte Suprema”, Siglo Veintiuno Editores, 2022, p. 183).

Por todo ello,

RESUELVO

1) Prorrogar el período de prueba impuesto a S. A. J., cuyos datos personales ya fueron referidos, por el término de 6 (seis) meses a contar desde el día de la fecha (01/06/2023 al 01/12/2023), tratamiento al cual fue sometido mediante Sentencia N° 33 de fecha 08/06/2022 de este Juzgado Penal Juvenil.

2) El período de prueba impuesto a continuará en condición de libertad, debiendo S. A. J. dar cumplimiento con compromiso y responsabilidad a las siguientes pautas de conducta:

a)	No cometer nuevos delitos ni contravenciones;
b)	No tener o manipular armas;
c)	No consumir drogas ni emborracharse;
d)	Realizar tratamiento psicológico con orientación psicosexual, debiendo acreditar mensualmente asistencia y, al final del período, acompañar amplio informe de diagnóstico y evolución;
e)	Continuar la escuela secundaria hasta su finalización;
f)	Trabajar en la medida de sus posibilidades, y;
g)	Seguir practicando deporte.

3) Prohibir a S. A. J. comunicarse y acercarse a I. Q. y a sus progenitores y hermanos, por el término de 6 meses y bajo apercibimiento del art. 239 del Código Penal.

4) Diferir el pronunciamiento sobre la eventual necesidad de imponer pena y costas hasta el vencimiento del régimen de prueba prorrogado.

5) Comunicar a la víctima las facultades que le otorga la Ley N° 27.372.

Palabras dirigidas a S. A. J., I. Q. y sus progenitores

“Hola, soy Andrés, el Juez que llevó adelante el proceso seguido en contra de S. A. J. por los hechos contra la integridad sexual de I. Q.

Como saben y les expliqué, el año pasado declaré responsable a S. A. J. por los hechos denunciados en su contra (Sentencia N° 33 de fecha 08/06/2022) y por ello lo sometí a un período de prueba por el término de un año.

Si bien S. A. J. dio cumplimiento a la mayoría de las pautas de conducta que le impuse, no logró acreditar la adherencia al tratamiento psicológico con orientación psico-sexual, lo que resulta absolutamente necesario para delitos contra la integridad sexual como los que cometió.

Si bien es cierto que S. A. J. reconoció que estuvo mal y pidió perdón a la víctima en esta audiencia, decidí extender el período de prueba hasta el 1° de diciembre de 2023.

Mi decisión se fundamenta en la gravedad de los delitos cometidos y en la necesidad de que S. A. J. reflexione sobre conductas pasadas y genere empatía para reinsertarse en la sociedad de manera constructiva y evitar la reincidencia delictiva.

Durante ese plazo, S. A. J. deberá cumplir con las pautas de conducta que están en el recuadro que acabo de leer, poniendo especial énfasis en el tratamiento psicológico con orientación psicosexual.

Después del 1° de diciembre de 2023 evaluaremos nuevamente el progreso de S. A. J. y analizaremos si corresponde aplicarle pena por los delitos cometidos siendo menor de edad.

También es importante resaltar que mantuve la ‘perimetral’ de S. A. J. con I. Q. y sus familiares, por lo que no podrá acercarse y comunicarse con ellos por 6 meses. Si lo hace, va a incurrir en el delito de desobediencia a la autoridad y se iniciará una nueva causa en su contra (art. 239 del Código Penal).

Cualquier duda, pueden hablar con sus abogados, o si lo prefieren, pueden hacerlo conmigo o con los demás integrantes de este Juzgado.

Estamos a disposición para explicarles cualquier duda que tengan.

Los saludo, Andrés E. Peretti (Juez)".